

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

En los autos Rol N° 24.292-2020 de esta Corte Suprema, la Ministro de Fuero señora Marianela Cifuentes Alarcón, por sentencia de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, escrita a fojas 1271, en lo que interesa a los recursos, condenó a Héctor Fernando Osses Yáñez, en calidad de autor del delito de secuestro simple, en grado de consumado, cometido en contra de Juan Jorge Gallardo Núñez, el 10 de octubre de 1973, en la comuna de La Granja, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio y en calidad de autor del delito de homicidio calificado en grado de consumado, respecto de la misma víctima, a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio. Por la misma sentencia se condenó a Aquiles Bustamante Oliva, en calidad de autor del delito de secuestro simple, en grado de consumado, cometido en contra de Juan Jorge Gallardo Núñez, el 10 de octubre de 1973, en la comuna de La Granja, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio y en calidad de autor del delito de homicidio calificado en grado de consumado, respecto de la misma víctima, a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio. Por último condenó a Julio César Yáñez Illanes, en calidad de autor del delito de homicidio calificado, en grado de consumado, cometido en contra de Juan Jorge Gallardo Núñez, el 10 de octubre de 1973, en la comuna de La Granja, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

Apelada dicha sentencia, la Corte de Apelaciones de San Miguel, por resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, que rola a fojas 1468 de autos, en lo que interesa a los recursos, la revocó en cuanto condenó a Héctor



Fernando Osses Yáñez y Aquiles Bustamante Oliva como autores del delito de secuestro simple de Juan Jorge Gallardo Núñez, ocurrido el 10 de octubre de 1973, y en su lugar se los absuelve. También revoca el fallo aludido por el que se condenó a Aquiles Bustamante Oliva como autor del delito de homicidio calificado de la misma víctima, ocurrido el mismo día y en su lugar, se le absuelve. Además, confirmó la sentencia en cuanto condenó a Héctor Fernando Osses Yáñez en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Juan Jorge Gallardo Núñez, con declaración que la pena se reduce a cinco años de presidio menor en su grado máximo, otorgándole el beneficio de la libertad vigilada. También se confirma la sentencia en cuanto condenó a Julio César Yáñez Illanes como autor del delito de homicidio calificado, cometido respecto de la misma víctima, con declaración que la pena se reduce a tres años de presidio menor en su grado medio, y se le concede la remisión condicional de la pena.

Contra ese último pronunciamiento, la Unidad de Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo dedujo recurso de casación en el fondo y la defensa de Héctor Fernando Osses Yáñez interpuso recurso de casación en la forma, que se ordenaron traer en relación por decreto de fojas 1531.

Considerando:

Primero: Que el recurso de casación en la forma deducido por la defensa de Bustamante Oliva se funda en primer lugar en la causal del artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 500 N° 4 del mismo cuerpo legal, como también los artículos 15 N° 2 del Código Penal; el Reglamento N° 7 de Carabineros de Chile y 270 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto la sentencia no contiene las consideraciones en cuya virtud se dan por



probados los hechos atribuidos al encartado, y los que éste alega en sus descargos para eximirse de responsabilidad, pues el fallo en los considerandos undécimo y duodécimo da por acreditada la participación del acusado en los hechos investigados, sin reales consideraciones; solo trata de dar cumplimiento formal a las exigencias legales que deben cumplirse en la dictación de las sentencias.

Por ello estima que se ha infringido el artículo 15 N° 2 del Código Penal, expresando que en las diecisiete causas en que se ha condenado al encartado se establece su responsabilidad únicamente basado en el mando que ejercía en el recinto policial.

Arguye que el fallo impugnado no toma en consideración el artículo 57 N° 13 del Reglamento 7 de Carabineros de Chile, en que se establece una expresa y permanente delegación de responsabilidad en el Oficial de Guardia.

También se invoca la causal del numeral 10 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto solo por la acusación particular efectuada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se adicionó el delito de homicidio calificado, perpetrado en contra de la víctima, mismos hechos por los que se le condenó.

Agrega que se acusa y condena al encartado como autor del numeral 2 del artículo 15 del Código Penal y en ese orden de ideas fue defendido al contestar la acusación, pero se le condena por no fiscalizar al personal a fin de impedir que delinquieran, lo que no se enmarca en un tipo de autoría, por lo que se extiende a puntos inconexos con los que fueron materia de la acusación y respecto de los cuales la defensa ejerció sus derechos.



Manifiesta que también se quebrantó el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 15 N° 2 del Código Penal, pues no es un hecho real y probado que Osses haya dado órdenes a los funcionarios policiales bajo su mando para detener y matar a personas determinadas.

Concluye solicitando se invalide el fallo y se dicte una nueva sentencia conforme a la ley y al mérito del proceso, en el que no hay elementos que permitan sostener que Osses realizó conductas que puedan reprocharse penalmente en los términos del artículo 15 N° 2 del Código Penal.

Segundo: Que la Unidad Programa de Derechos Humanos interpuso recurso de casación en el fondo fundado en primer lugar en la causal contemplada en el N° 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por haberse aplicado el artículo 103 del Código Penal.

Señala que el vicio o defecto denunciado se configuró, en la especie, al reconocerse incorrectamente a los sentenciados Héctor Osses Yáñez y a Julio Yáñez Illanes, la circunstancia minorante contemplada en el artículo 103 del Código Penal, por cuanto la prescripción gradual comparte la misma naturaleza jurídica y fundamentos que la prescripción de la acción penal y la pena, por lo que su aplicación a hechos que son constitutivos de delitos de lesa humanidad, y como tales, imprescriptibles, resulta del todo improcedente.

Expresa que con la aplicación de la citada norma se vulnera de manera manifiesta el principio de la proporcionalidad de la pena, propiciando de esta manera la impunidad de los autores de los crímenes de la víctima de autos, al imponerles una pena tan leve que representa sólo una apariencia de justicia, tanto para las víctimas y sus familias, como para la sociedad en su conjunto, haciendo



caso omiso al ius cogens, y asimismo, a las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado de Chile, mediante la suscripción de diversos tratados internacionales de derechos humanos.

En segundo lugar, esgrime la causal establecida en el N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por la aplicación errónea del artículo 488 números 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 7, 14, 15 N° 2 y 391 N° 1 circunstancia primera, todos del Código Penal, vigente a la época de los hechos.

Explica que los antecedentes que constan en el proceso satisfacen los dos requisitos señalados por el artículo 488 N° 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, en lo referente a la participación de Aquiles Bustamante Oliva como autor del homicidio calificado de Juan Gallardo Núñez, pues se encuentra acreditado en el proceso que a la época de los hechos integraba la dotación de la Subcomisaría de La Granja, como segundo a bordo de la unidad, que sucedía en el mando a Héctor Osses, lo subrogaba en su ausencia, quedando a cargo del control y administración de la unidad, de la fiscalización de todos los actos efectuados por el personal de la Subcomisaría.

Agrega que a la época de los hechos, conforme a los medios de prueba incorporados, el personal de la Subcomisaría de La Granja se encontraba acuartelado entre los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973 y fines de octubre del mismo año; como también la existencia de ejecuciones efectuadas por el personal subalterno. Por ello, es correcto concluir que el teniente Aquiles Bustamante, necesariamente estuvo en conocimiento de los hechos ocurridos el 10 de octubre de 1973 y, en consecuencia, participó en los mismos en



calidad de autor en los términos del N° 2 del artículo 15 del Código Penal, al compartir el mando con Héctor Osses Yáñez, subrogarlo y detentar las mismas responsabilidades respecto de la unidad policial a la que pertenecían.

Concluye que por lo expresado el encartado es un autor mediato, lo que se desprende de la dinámica organizacional que existía al interior de la unidad policial, y que a su vez era parte de una estructura jerárquica institucional, funcional a la situación represiva de un régimen de facto vigente a la época de los hechos.

Finaliza pidiendo se acoja el recurso y se invalide la sentencia en aquella parte que favorece con la aplicación del artículo 103 del Código Penal a los condenados Héctor Osses Yáñez y Julio Yáñez Illanes, y en lo relativo a la revocación en la parte que absuelve a Aquiles Bustamante Oliva, por el mismo delito, para en seguida dictar sentencia de reemplazo que les imponga el máximo de la pena privativa de libertad prevista por el legislador por su participación en calidad de autores del delito de homicidio calificado cometido en contra de Juan Gallardo Núñez y, condenando como autor del delito de homicidio calificado referido, en grado de consumado a Aquiles Bustamante Oliva, más las accesorias legales y costas de la causa.

Tercero: Que, como se consigna en el basamento décimo tercero de la sentencia de primer grado —no alterada en alzada—, ésta tuvo por demostrados los siguientes hechos:

“1.- Que el día 10 de octubre de 1973, en horas de la noche, en circunstancias que Juan Jorge Gallardo Núñez, de 19 años de edad, se encontraba en su domicilio, ubicado en avenida Sur N° 0460 de la Población San



Gregorio, en compañía de su padre Juan Gallardo Mora, su madrastra María Agustina Ferrada Quilodrán y su hermano Claudio Enrique Gallardo Ferrada, fue detenido, sin derecho, por funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de Carabineros de La Granja.

2.- Que, en esa época, la Subcomisaría de Carabineros de La Granja estaba a cargo del capitán Héctor Fernando Osses Yáñez y del Teniente Aquiles Bustamante Oliva.

3.- Que, posteriormente, al concurrir la madre de la víctima a la Subcomisaría de Carabineros de La Granja a requerir información acerca de su situación, se le comunicó que éste había sido entregado a una patrulla militar, lo que no correspondía a la verdad, toda vez que había sido ejecutado en la vía pública en el sector de Lo Valledor, mediante una herida bala en el tórax, por una patrulla de carabineros de la referida unidad policial, integrada, entre otros, por el Sargento Segundo Armando Sáez Pérez –fallecido- y los carabineros Desiderio Armando Arroyo Cabezas –fallecido- Fernando Enrique Valenzuela Rebolledo –fallecido- y Julio César Yáñez Illanes”.

Estos hechos fueron calificados por el tribunal de alzada como constitutivos del delito de homicidio calificado, contemplados en el artículo 391, N° 1, circunstancia primera del código punitivo, en grado consumado, cometido en contra de Juan Jorge Gallardo Núñez. Asimismo, tales hechos fueron subsumidos como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a lo razonado en la motivación 15ª de fallo de primer grado.

Cuarto: Que dada la similitud de los fundamentos en que se basa la imputación a los acusados Osses Yáñez y Bustamante Oliva, así como de los



cuestionamientos que plantea la defensa de uno de los sentenciados, inevitable será, en lo que corresponda reiterar lo ya razonado por esta Corte en las sentencias recaídas en los ingresos N°s 14.594-19, de 7 de octubre de 2021; y 22.962-2019, de 28 de junio de 2022.

Quinto: Que la correcta decisión de las problemáticas traídas al conocimiento de esta Corte hace menester el estudio y reflexión previo de algunas materias que resultarán indispensables para lo que más tarde se resolverá, lo cual se llevará a cabo apegándonos a los hechos que se tuvieron por acreditados en la sentencia en estudio, así como también en base a los antecedentes que fueron valorados para arribar a esas conclusiones factuales, esto último, a fin de ir sincrónicamente evidenciando que existen elementos probatorios que dan soporte a esas conclusiones.

Sexto: Que, en un primer orden, hay ciertos supuestos en que la imputación de la conducta de una persona puede hacerse directamente al tipo penal respectivo, pero no por su realización inmediata, sino por haberlo realizado mediante otro, que ha sido utilizado como instrumento de su obrar. Son los casos de la llamada autoría mediata, que entre nosotros se encuentra ya mayoritariamente aceptada como categoría independiente de la inducción (que corresponde sólo a una forma de participación criminal en el hecho de otro).

Luego, a efectos de aplicación de la ley, no hay diferencias en el nivel de responsabilidad del autor inmediato con el del mediato: ambos son autores, esto es, realizan el hecho punible, mediante una conducta directamente subsumible en el tipo penal. La diferencia radica únicamente en que el autor inmediato realiza la acción típica personalmente, mientras el mediato hace ejecutar el hecho mediante



otro (Politoff, S., Matus, J., Ramírez, M. Lecciones de Derecho Penal Chileno, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 402).

Séptimo: Que, entre los casos de autoría mediata se incluye la dirección del intermediario ("instrumento doloso") a través de un aparato organizado de poder.

El factor decisivo que funda esta autoría es la naturaleza absolutamente fungible o intercambiable del ejecutor quien, aunque actúe de manera libre y consciente, con plena culpabilidad, es para el individuo de atrás simplemente una persona anónima y sustituible a voluntad. Ellos serían ruedecillas en el funcionamiento del aparato, sin que importe la persona individual del ejecutor (Roxin, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal. Cuello, J. y Serrano, J. (trad.), Marcial Pons, 2000, pp. 271-273).

La situación en examen se daría, paradigmáticamente, en los crímenes dispuestos por los aparatos de un Estado no democrático (Cury, E. "Artículos 14 a 17", en Politoff, S., y Ortiz, L. (dir.), Texto y Comentario del Código Penal Chileno, Editorial Jurídica de Chile, 2009, p. 243).

Octavo: Que en el estado actual de la historiografía nacional, ratificada por innumerables investigaciones y sentencias judiciales, es un hecho público y notorio —que, por tanto, dispensa de probarlo—, que en nuestro país, desde el 11 de septiembre de 1973 y por varios años después, diversos organismos e instituciones estatales, estuvieron al servicio, o actuaron como parte, brazos o auxiliares, de una estructura destinada a la represión generalizada de miles de compatriotas, principalmente por su pensamiento político adverso al régimen militar imperante, pero también por diversas otras incomprensibles razones. Sin



perjuicio de lo dicho, la existencia de esta política generalizada de represión fue desarrollada en el motivo 15º de la sentencia de primer grado, no alterado en alzada, con ocasión de la calificación de los hechos de marras como crimen de lesa humanidad.

Noveno: Que dichos organismos e instituciones estatales a los que antes se ha hecho mención, dada su presencia en todo el país, permitían a través de sus agentes, concretar a nivel local, esa política general de represión en personas de carne y hueso, contribuyendo en su identificación como opositores al régimen, ubicación, detención, tortura y muerte, según el caso.

Décimo: Que en parte del sector sur de la ciudad de Santiago, la realización de esa política general en dicho territorio, correspondió, entre otras instituciones, a la Subcomisaría de Carabineros de La Granja.

En efecto, la detención y muerte de Juan Jorge Gallardo Núñez y de otras personas que se investigaron en expedientes separados, ocurre días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, encontrándose el país en estado de sitio y con toque de queda, y llevándose a cabo a lo largo del territorio cientos de ejecuciones y desapariciones de personas opositoras al régimen militar instaurado, por miembros de las fuerzas armadas y de orden y seguridad. Concordantemente, ya se ha dictado sentencia condenatoria contra los recurrentes por el secuestro y homicidio de Joaquín Montecinos Rojas, ocurrido el día 8 de octubre de 1973 (SCS N° 14.594-2019, de 7 de octubre de 2021); por el delito de sustracción agravada de un mayor de 10 años y menor de 18 años, cometido en contra de Víctor Fernando Maldonado Núñez, el 22 de septiembre de 1973 (SCS N° 22.962-2019, de 28 de junio de 2022); y, contra Osses Yáñez por el



secuestro de Jeremías Jara Valenzuela, a partir del 19 de octubre de 1973 (SCS N° 19.203-2019, de 24 de diciembre de 2021). Por tanto, mal podría postularse que lo obrado al interior de la Subcomisaría de La Granja obedece a hechos aislados y desconectados de ese actuar colectivo y organizado que se desenvolvía en todo el país.

Undécimo: Que, en el caso sub iudice, ejecutar a nivel local esta política general de represión requirió designar un contingente fijo o rotativo de agentes de la respectiva unidad territorial para su cumplimiento, asignarles un encargado o responsable directo de su operación —Sargento Sáez Pérez alias “El Manchado”, según mencionan varios testigos—, y dotarlos de medios materiales para la detención, traslado y atentados contra las víctimas —“vehículos requisados” y armas—. Todo lo anterior, requería, huelga explicar, la intervención y aprobación de los jefes o superiores de la unidad policial en examen.

Duodécimo: Que, empero, mucho más relevante y determinante para la real y efectiva ejecución de esa política general de represión a nivel local, era asegurar a los agentes ejecutores, que los delitos que se cometieren en el cumplimiento del encargo, no serían “realmente” investigados ni sancionados, ni administrativa ni penalmente, precisamente porque éstos constituirían una manifestación y materialización de dicha política, de la que se ha hecho parte la institución a la que pertenecen y, en particular, la unidad que integran. En ese orden de ideas, en una institución jerarquizada y militarizada como Carabineros, el agente que se encuentra en el último peldaño del escalafón, únicamente actuará para cumplir esa política general, más aún si involucra la comisión de graves delitos, si la misma es ratificada y refrendada, expresa o tácitamente, por sus



superiores directos —los jefes de la unidad—, única garantía de que luego no serán perseguidos por su ejecución.

Con ese proceder, conviene despejar, los jefes de la unidad policial no sólo comunican o transmiten una orden que proviene de muy arriba en la estructura burocrática, sino que la hacen propia y, por ende, el agente que la desobedece, no sólo se subleva frente al lejano y difuso jerarca que desde las oficinas centrales de la institución distribuye las infames instrucciones generales, con improbables concretas consecuencias adversas, sino desafía directamente al cercano jefe de su unidad, exponiéndose a claras e inminentes represalias.

Décimo tercero: Que, en este contexto, contrario a lo que cree la defensa de Osses, la imputación que se realiza a los jefes de la Subcomisaría de La Granja, no se edifica en sus omisiones, pasividad o inactividad, esto es, por no haber detenido e impedido que se siguieran cometiendo delitos por funcionarios bajo su mando y con medios materiales a cargo de su administración, pese a saber o no poder no saber que ello ocurría, sino que aquí se observa responsabilidad por una conducta activa o positiva, esto es, la implementación de una política nacional de represión en el ámbito local, para lo cual, como ya se reseñó, se destina un grupo de personas a cargo de un sargento, se permite el uso de vehículos y armas a disposición de la unidad policial para ese efecto, y se supervisa diariamente su ejecución mediante los reportes diarios matutinos.

Décimo cuarto: Que las consideraciones precedentes conducen a calificar la conducta de los jefes de la Subcomisaría de La Granja, a la época de los hechos, como autoría mediata por dirección del instrumento doloso a través de un aparato organizado de poder, pues autor mediato no solo es el jefe máximo de



una organización criminal, sino todo aquel que en el ámbito de la jerarquía transmite la instrucción delictiva con poder de mando autónomo, pudiendo ser autor incluso cuando él actúa por encargo de una instancia superior, formándose así una cadena de autores mediatos (Montoya, M. citado por Ríos, J. "De la autoría mediata en general y de si en Chile su inexpresividad legal constituye una laguna de punibilidad". Polít. crim. nº 2. A4, p.1-23).

En razón de tal carácter, es que los jefes de la Subcomisaría de La Granja, podrían no haber dado directamente a el o los agentes ejecutores la orden de detener y matar a nadie en particular, dejando la determinación de a quién y cuándo hacerlo, así como por qué miembro de la comisión formada al efecto, al jefe asignado a ésta —Sargento Sáez Pérez en este caso—. De esta suerte, el concreto ejecutor de la detención y muerte de las víctimas deviene en irrelevante para el autor mediato, pues aquél no es más que una pieza fungible de este aparato organizativo, en el cual ante la negativa u oposición de un funcionario policial para ejecutar el delito, puede ser sustituido fácilmente por alguno de los tantos otros que integraban la unidad, circunstancia que demuestra el dominio del hecho que posee el autor mediato, en este caso, los jefes de la Subcomisaría de La Granja.

Décimo quinto: Que, entonces, conviene ser enfático en esto, dicha intermediación en nada aminora la responsabilidad de los jefes de la Subcomisaría de La Granja, sino que muy por el contrario, la agrava, pues como acertadamente se ha dicho, en esta clase de crímenes, masivos no solo desde el punto de vista de las víctimas, sino también de los victimarios, "la medida de la responsabilidad



no disminuye, sino crece, con la mayor distancia del lugar de los hechos” (Schröder, citado por Politoff et al, ob. cit., p. 412).

Décimo sexto: Que, la opinión mayoritaria se decanta por atribuirle al “hombre de atrás” solo la calidad de inductor (Así lo manifiestan Hernández, H., “Artículo 15”, en Couso, J. y Hernández, H. Código Penal Comentado, Legal Publishing Chile, 2011, p. 393, y Politoff et al, ob. cit., pp. 414-415, del examen de la doctrina nacional), tal como lo hace la sentencia recurrida que encasilla la participación del acusado Osses Yáñez en el N° 2, del artículo 15 del Código Penal, descartando la autoría de Bustamante Oliva. Pero aun de considerarse ello equivocado, por postularse el encuadre de la autoría mediata en otro numeral del mencionado artículo 15, o directamente en el tipo penal pertinente de la parte especial, o estimarla una coautoría, cualquiera sea la posición dogmática a que se adhiera, ello no altera la conclusión de que se debe sancionar al responsable con la pena prevista para el autor del delito en cuestión y, de ahí, la falta de trascendencia e influencia en lo dispositivo del fallo de tal eventual desavenencia (Ríos, ob. cit., explica que no hay coautoría porque falta entre la persona de la cúspide y el instrumento el carácter conjunto de la resolución del hecho y de la ejecución, ni tampoco inducción porque el autor de despacho sólo tiene que dar una orden y, en cambio, el inductor debe buscar un autor, contactarlo, y finalmente vencer su resistencia y enrolarlo para su plan, todo lo cual puede ahorrárselo quien manda en una organización jerárquica. Desestima también la inducción Politoff et al, ob. cit., pp. 414-415. Mientras, Cury (ob. cit, p. 243) considera que, el que ordena una ejecución masiva es inductor del artículo 15, N° 2 del Código Penal, el que la ejecuta autor del artículo 15, N° 1, y los que se encuentran en



medio de la maquinaria responderán como autores-cómplices del artículo 15, N° 3 o como cómplices del artículo 16).

Décimo séptimo: Que la sentencia igualmente se apoya en diversos testimonios, y establece hechos, que permiten afirmar la autoría mediata en la forma ya latamente explicada.

Con todo, y a mayor abundamiento, conviene tener presente que tratándose de delitos contra los derechos humanos, la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales han considerado que tratándose de estructuras jerarquizadas — como las militares—, existe, junto al autor ejecutor, un autor particular de la infracción internacional, que es el superior jerárquico, forma de participación que emana de las órdenes que dio, estando comprometida su responsabilidad en calidad de superior jerárquico, y siempre que forme parte de la cadena de mando.

Así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, que ha señalado que los elementos constitutivos para la responsabilidad del superior provienen del artículo 86-2 del Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra, además de otros instrumentos internacionales, siendo tales elementos: 1. La existencia de un vínculo de subordinación entre el ejecutor y el superior jerárquico; 2. El conocimiento o el conocimiento implícito del superior de que el crimen iba a ser cometido o era cometido o se había cometido; 3. La omisión por parte del superior de tomar las medidas necesarias y razonables para impedir la perpetración del crimen o para castigar al autor.

Décimo octavo: Que Osses Yáñez y Bustamante Oliva, a la época de estos hechos, estuvieron a cargo de la Subcomisaría de La Granja y, por ende,



constituyeron ese eslabón imprescindible, para que esa política estatal de represión con un horizonte nacional se materializara en el ámbito local, lo que permite calificar su responsabilidad de autoría mediata.

La dirección de la mencionada unidad por los encartados es un hecho establecido en el N° 2 del motivo 13° de la sentencia de primera instancia, no modificado por el tribunal de alzada, conclusión fáctica que tiene pleno asidero en diversos testimonios de funcionarios policiales que se desempeñaron allí a la sazón, los que se extractan en el considerando 12° del fallo de primer grado, todos los que, pese al distinto grado jerárquico de Osses Yáñez —capitán— y Bustamante Oliva —teniente—, coinciden en atribuirles indiferenciadamente el mando de la mencionada unidad policial.

Décimo noveno: Que esa igualdad o equiparación de Osses Yáñez y Bustamante Oliva, en los hechos, en el mando de los subalternos de la Subcomisaría de La Granja, en su responsabilidad como autores mediatos, aparece de lo declarado por Leonardo Moya Huerta a fojas 251, y Paul Amado Vega Orellana a fojas 249, como también de lo expresado por los acusados Segundo Baldomero Llanos Amariles, a fojas 489 y Julio César Yáñez Illanes, a fojas 254, 592, 593 y 704, quienes de manera conteste expresan que la referida unidad policial se hallaba bajo el mando de Osses Yáñez y Bustamante Oliva.

Vigésimo: Que algunos de estos testigos además entregaron relevantes antecedentes —todo ello contenido en el fallo recurrido— para descartar que se tratara de acciones ilícitas realizadas únicamente fuera de la unidad policial, en desconocimiento, por tanto, de los superiores, menos aún en el caso de Osses



Yáñez que habría dado órdenes para que funcionarios realizarán patrullajes y fusilamientos.

De esa manera, Leonardo Adán Moya Huerta señaló que trabajaba en la subcomisaría, que estaba al mando del capitán Osses y del teniente Bustamante, estando acuartelado el personal desde el 11 de septiembre hasta fines de octubre de 1973, y que sabía por comentarios que el sargento Armando Sáez Pérez salía a realizar patrullajes en camionetas requisadas, dos de color blanco, realizando junto a su patrulla fusilamientos por orden del capitán Osses.

Lo anterior fue corroborado por Paul Amado Vega Orellana, en el sentido que la Subcomisaría de Carabineros de La Granja estaba al mando del capitán Osses Yáñez, secundado por el teniente Bustamante Oliva.

Por su parte, Llanos Amariles refiere que la referida unidad policial estaba a cargo del capitán Héctor Osses Yáñez y que en cuatro oportunidades participó en fusilamientos de detenidos, como conductor de la camioneta que los transportó al lugar de la ejecución.

En tanto, que el acusado Yáñez Illanes explicó que a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta noviembre de ese año cumplió funciones en la Subcomisaría de Carabineros de La Granja, la que se encontraba a cargo del capitán Osses Yáñez, integrando la patrulla a cargo del sargento Armando Sáez Pérez en cuatro oportunidades en las que fusilaron a detenidos por orden expresa del mencionado Osses Yáñez y que Bustamante Oliva, a pesar de ser el segundo al mando, nunca dijo algo.



Vigésimo primero: Que este extenso pero inexcusable preámbulo se compensará en el análisis de los recursos deducidos, pues gran parte de los defectos que ellos acusan ya han sido tratados.

Vigésimo segundo: Que el arbitrio de casación en la forma deducido por el apoderado de Osses Yáñez, se funda en la causal del N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 500 N° 4 del mismo código y en el artículo 541 N° 10 del mismo cuerpo legal.

Vigésimo tercero: Que, en primer término, el recurso arguye que el fallo no contiene ninguna imputación fáctica relacionada con el artículo 15, N° 2 del Código Penal ni menciona cuáles son los elementos de cargo útiles para sostenerla.

Respecto de estas alegaciones por no demostrar el fallo el forzamiento o inducción de persona determinada con concretos elementos de cargos, bastará para desestimarlas tener presente, como se colige de todo lo ya discurrido, en especial en los considerandos 13° a 16°, tratándose de autoría mediata por utilización de instrumento doloso a través de un aparato organizado de poder, resulta impertinente esperar, en el caso sub lite, que para la sanción del autor se demuestre el forzamiento o inducción directa —entendidos estos actos en el sentido restringido y tradicional—, de aquél sobre el autor ejecutor, debiendo sólo demostrarse la realidad de ese aparato organizado de poder para implementar, a nivel local, la política generalizada de represión, así como el rol que en dicho aparato tuvieron a quienes se endilga el rótulo de autor mediato, todo lo que se demostró y asentó en la especie, como ya fue explicado en relación a Osses Yáñez y Bustamante Oliva.



Vigésimo cuarto: Que, por otra parte, arguye que el fallo no establece realmente consideraciones a fin de establecer la responsabilidad de su defendido.

Sin embargo, del análisis de los razonamientos del fallo de segundo grado, undécimo y duodécimo de la sentencia impugnada, es posible concluir que el fallo contiene los fundamentos para establecer la participación de Osses Yáñez. De esa manera, la sentencia en análisis sí contiene las consideraciones en cuya virtud se dan por probados los hechos atribuidos al encausado, sin que pueda por medio del recurso deducido, examinarse si, al tenor de los diversos elementos de convicción, es legalmente correcto el tener por demostrada la participación atribuida, pues ello importaría revisar la correcta aplicación de las normas que reglan la valoración de la prueba, asunto que escapa a los defectos que por la vía recursiva elegida puede esta Corte revisar.

Vigésimo quinto: Que sobre la errónea aplicación de normas reglamentarias de Carabineros de Chile, en relación con el artículo 270 del Código de Procedimiento Penal (sic), y más allá que se invoca la infracción de una norma sin rango legal, lo decisorio es que de ser efectivo el error, no es uno atingente a una norma ordenatoria litis, que es el campo propio del recurso de casación en la forma deducido. La última norma aludida —artículo 270—, actualmente derogada y que disponía el apercibimiento del citado en el texto original, ninguna pertinencia reviste aquí.

Vigésimo sexto: Que, en lo que respecta a la supuesta vulneración del artículo 488 del código de enjuiciamiento criminal, en lo referido a las presunciones, la eventual vulneración de esta norma escapa a la vía de impugnación propuesta, toda vez que la misma se ha dicho que pertenece a



normas necesarias para el establecimiento de los hechos y, por tanto, irrumpen en el escenario de aquellas normas decisoria litis —en sus numerales 1 y 2—.

Vigésimo séptimo: Que, asimismo, respecto de la causal enunciada en el recurso, fundada en el artículo 541 N° 10 del código adjetivo, como ya se ha dicho, en los fundamentos pretéritos, la responsabilidad que le asiste a Osses Yáñez corresponder a una autoría mediata, de forma tal que el yerro impetrado no resulta efectivo.

Vigésimo octavo: Que por todo lo razonado precedentemente, el recurso de casación en la forma formulado por la defensa de Osses Yáñez no podrá prosperar.

Vigésimo noveno: Que, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dedujo recurso de casación sustancial, fundando el arbitrio, en primer lugar, en el motivo de invalidación previsto en el artículo 546, N° 1 del Código de Procedimiento Penal, causal que se configura al haberse reconocido en el fallo de segundo grado, de manera incorrecta, la morigerante de responsabilidad criminal establecida en el artículo 103 del Código Penal, esto es, la prescripción gradual, la cual, en adición a las circunstancias atenuantes reconocidas a los encartados, llevó a los sentenciadores a aplicar una pena inferior en grado a la que le correspondería.

Trigésimo: Que, resulta necesario analizar ahora el recurso de casación en fondo propuesto por el Programa de Derechos Humanos, en relación a la decisión de los sentenciadores de segundo grado para aplicar en favor de los encartados lo establecido en el artículo 103 del Código Penal, relativo a la prescripción gradual de la pena, resulta preciso tener en consideración que la materia en discusión



debe ser analizada conforme a la normativa internacional de los Derechos Humanos contenida principalmente en los Convenios de Ginebra, que impiden la prescripción, total o gradual, respecto de delitos cometidos en casos de conflictos armados sin carácter internacional. A la misma conclusión se llega considerando tanto las normas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como las de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, por cuanto de conformidad a esa normativa, la prescripción gradual tiene la misma naturaleza que la total.

Desde otra perspectiva, la doctrina, sobre esta materia ha expresado que sus fundamentos se encuentran en las mismas consideraciones de estabilidad social y certeza jurídica que dieron origen al artículo 93 del Código Penal, pero que está destinada a producir sus efectos en aquellos casos en que la realización de los fines previstos para la prescripción no concurren en forma natural sino al cabo de un proceso gradual, esto es, cuando el lapso necesario para prescribir está por cumplirse, lo que justificaría la atenuación de la pena. Sin embargo, es evidente que aquella conclusión es para los casos que no presentan las características de los delitos de lesa humanidad, pues estos son imprescriptibles. En consecuencia, para que dicha atenuación sea procedente es necesario que se trate de un delito en vías de prescribir, lo que no acontece en la especie, de modo que el transcurso del tiempo no produce efecto alguno, debido a que el reproche social no disminuye con el tiempo, lo que solo ocurre en los casos de delitos comunes.

Por otro lado, como se anticipó, se trata de una materia en que los tratados internacionales tienen preeminencia, de acuerdo con el artículo 5º, inciso 2 º de la



Constitución Política de la República. Esas normas prevalecen y la pena debe cumplir con los fines que le son propios y que fueron enunciados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2583, de 15 de diciembre de 1969, que señala: La sanción de los responsables por tales delitos es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y para fomentar la confianza, estimular la cooperación entre pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacionales. En el mismo sentido, el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación de sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con una pena proporcional al crimen cometido.

Por último, tal como esta Corte ha sostenido en numerosos fallos anteriores, el artículo 103 del Código Penal no solo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquélla, y como ambos institutos se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total debe alcanzar necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, debido a que ambas situaciones se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguna resulta procedente en ilícitos como en el de la especie (entre otras, SCS N°s 17.887-2015, de 21 de enero de 2015; 24.290-2016 de 8 de agosto de 2016; 44.074-2016 de 24 de octubre de 2016; 9.345-2017, de 21 de marzo de 2018; 8.154-2016 de 26 de marzo de 2018; y, 825-2018 de 25 de junio de 2018).



Trigésimo primero: Que por último, este tribunal además tiene en consideración que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó, por lo que, en tales condiciones, la sentencia incurrió en el motivo de invalidación en que se funda el recurso de casación en el fondo deducido por el Programa de Derechos Humanos, al acoger la prescripción gradual que regula el artículo 103 del Código Penal, en un caso que era improcedente, lo que tuvo influencia sustancial en lo decisorio, pues su estimación, condujo a los jueces del fondo a imponer a los sentenciados un castigo menor al que legalmente correspondía, de manera que esta causal del arbitrio en estudio será acogida.

Trigésimo segundo: Que en lo concerniente a la segunda causal del recurso de casación en el fondo deducido por el Programa de Derechos Humanos, como se adelantó, éste se afinca en el N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por la aplicación errónea del artículo 488 números 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 7, 14, 15 N° 2 y 391 N° 1 circunstancia primera, todos del Código Penal, al absolver a Bustamante Oliva no obstante haberse determinado fehacientemente su participación como inductor.

Respecto de estas alegaciones, bastará para acogerlas remitirse a lo explicado en los motivos 13 a 16 y 23° ut supra.



Trigésimo tercero: Que por todo lo razonado precedentemente, el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será acogido.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 541, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, y 767 y siguientes del de Procedimiento Civil que declara:

I.- Que se rechaza el recurso de casación en la forma, propuesto por la defensa de Héctor Osses Yáñez, a fojas 1.501, en contra de la sentencia de segunda instancia, de veintiocho de enero de dos mil veinte, escrita a fojas 1.468 y siguientes, pronunciada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

II.- Que se acoge el recurso de casación en el fondo propuesto por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según se lee a fojas 1.475, contra la referida sentencia, la cual es nula y se la reemplaza por la que se dicta inmediatamente a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que el Ministro Sr. Brito concurre a la decisión, teniendo además presente que la imputación que se hace a los jefes de la Subcomisaria de La Granja no se construye con omisiones, pasividad o inactividad, por no haber detenido e impedido que se siguieran cometiendo delitos por funcionarios bajo su mando, con medios materiales a cargo de su administración, sino, por el contrario, la imputación por la que se ha decidido en definitiva condenar se fundamenta en acciones concretas dirigidas por los enjuiciados, tales como haber destinado un grupo de personas a cargo de un sargento, haber dispuesto o autorizado la reclusión de personas en el recinto policial bajo su control, muchas de las cuales



terminaron muertas, haber permitido el uso de vehículos y armas a disposición de la unidad policial para ese efecto y haber supervisado diariamente la ejecución de sus decisiones mediante reportes diarios matinales. De manera que, consideradas sus conductas respecto de los graves delitos imputados, actitud que jurídicamente es la base de sus responsabilidades de autores, no puede menos que concluirse el concierto en los fines delictivos, motivos por los que no actúan ante aquellos delitos usando el mando para impedir las muertes, por lo que resulta indudable que tales actuaciones comportan una autoría mediata.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. María Cristina Gajardo, sólo en cuanto se acoge el recurso de casación en el fondo que denuncia la infracción por aplicación del artículo 103 del Código Penal, estimando que aquél debe ser rechazado, teniendo para ello en consideración los siguientes motivos:

1) La prescripción gradual constituye una minorante calificada de responsabilidad criminal, cuyos efectos inciden en la determinación del quantum de la sanción corporal, independiente de la prescripción, con fundamentos y consecuencias diferentes. Así, aquélla descansa en el supuesto olvido del delito, en razones procesales y en la necesidad de no reprimir la conducta, lo que conduce a dejar sin castigo el hecho criminoso. En cambio, la atenuante puede hallar su razón de ser en lo excesivo que resultaría una pena muy gravosa para hechos ocurridos largo tiempo atrás, pero que no por ello deben dejar de ser irremediablemente sancionados, resultando de su reconocimiento una eventual pena menor. De este modo, en casos como el presente, aunque el transcurso del tiempo desde la comisión del ilícito se haya prolongado en exceso, no provoca la



desaparición por completo de la necesidad del castigo y nada parece oponerse a que los tribunales recurran a esta atenuación de la sanción, pues el lapso transcurrido debe atemperar la severidad de la represión.

2) La prescripción gradual conforma una atenuante muy calificada cuyos efectos inciden sólo en el rigor del castigo y no conducen a la impunidad del hecho punible, y por su carácter de regla de orden público, su aplicación es obligatoria para los jueces, en virtud del principio de legalidad que gobierna al derecho punitivo.

3) No se advierte ninguna restricción constitucional, legal, de Derecho Convencional Internacional ni de ius cogens para su aplicación, desde que aquellas reglas sólo se limitan al efecto extintivo de la responsabilidad criminal y no a la atenuación de ella.

4) Finalmente, y en lo más medular de la institución de la prescripción gradual en causas como la sub lite, no es posible considerar que sólo una clase de personas no tiene derecho a que se le considere esta atenuante, ya que todas las personas objeto de persecución penal, tienen derecho a este beneficio. De considerarse así se estaría afectando la garantía constitucional de igualdad ante la ley y ello no puede ser así, porque dichas garantías benefician a todos los habitantes de la República.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm y de la disidencia, su autora.

Rol N° 24.292-2020.



HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO

Fecha: 24/01/2023 12:38:56

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO

MINISTRO

Fecha: 24/01/2023 12:38:56

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO

Fecha: 24/01/2023 12:38:57

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA

MINISTRO

Fecha: 24/01/2023 12:38:58

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA

Fecha: 24/01/2023 10:02:50



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., Maria Gajardo H. Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 24/01/2023 13:21:08

En Santiago, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 24/01/2023 13:21:09



Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada que rola a fojas 1.271 y siguientes, con excepción de sus motivos décimo cuarto; décimo octavo párrafo tercero; décimo noveno; vigésimo segundo párrafos tercero y cuarto; vigésimo tercero; los tres primeros párrafos del considerando vigésimo séptimo; trigésimo octavo; trigésimo noveno y cuadragésimo; cuadragésimo sexto; cuadragésimo séptimo; quincuagésimo noveno.

En el párrafo primero del considerando vigésimo quinto se sustituye la expresión “de los delitos de secuestro simple y homicidio calificado” por “en el delito de homicidio calificado”.

En el considerando cuadragésimo tercero se modifica el párrafo “las defensas de los acusados Aquiles Bustamante Oliva y Julio César Yáñez Illanes solicitaron la absolución de sus representados por favorecerles” por “la defensa del acusado Julio César Yáñez Illanes solicitó la absolución de su representado por favorecerle”; como también en el mismo motivo las palabras “funcionarios subalternos” por “funcionario subalterno”.

En el considerando sexagésimo segundo se eliminan letras a) y b), sustituyéndose las letras c), d) e) y f) por las letras a), b) c) y d) y se sustituye la frase “inferior en un grado” por “rebajada en dos grados”.

En el considerando sexagésimo tercero se elimina la frase “y Julio César Yáñez Illanes”.



Del fallo anulado se reproducen únicamente sus considerandos primero a duodécimo.

De la sentencia de casación que precede se reiteran sus basamentos quinto a vigésimo, vigésimo tercero y trigésimo y trigésimo primero.

Y teniendo, además, presente:

1º) Que apareciendo de los antecedentes que al enjuiciado Yáñez Illanes le benefician las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal establecidas en el artículo 11 N° 6 y 9 del punitivo, como ya se dejara asentado en los considerandos quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de la sentencia en revisión, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo 68 de ese mismo texto legal se impondrá la pena, correspondiente a la fecha de comisión de los hechos, rebajada en tres grados al mínimo, por lo que en concreto corresponde imponer la sanción de presidio menor, en su grado medio.

2º) Que en el caso del acusado Yáñez Illanes, concurriendo en su favor la circunstancia de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y demás requisitos de la Ley 18.216, se le sustituirá la sanción por remisión condicional de la pena por el lapso de aquella.

Y considerando además lo dispuesto por los artículos 510, 526 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se declara:

I.- Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma, deducido en lo principal de la presentación de fs. 1333, por parte del abogado Mauricio Unda Merino, en representación del acusado Héctor Osses Yáñez.

II.- Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma, deducido en lo principal de la presentación de fs. 1354, por parte del abogado Tomás Zamora Maluenda, en representación del acusado Aquiles Bustamante Oliva.



III.- Que **se revoca** la sentencia apelada de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve, que rola a fojas 1271 a 1326, dictada por la ministro de fuero señora Marianela Cifuentes Alarcón, sólo en cuanto en ella se condenó a cada uno de los procesados Héctor Fernando Osses Yáñez y Aquiles Bustamante Oliva, en calidad de autores del delito de secuestro simple, cometido en contra de Juan Jorge Gallardo Núñez, el día 10 de octubre de 1973 y, en su lugar se declara que se les absuelve de dicha acusación judicial.

IV.- Que **se confirma** la sentencia en alzada, sólo en cuanto en ella se condenó al procesado Julio César Yáñez Illanes, en calidad de autor del delito de homicidio calificado, cometido en contra de Juan Jorge Gallardo Núñez, ocurrido el día 10 de octubre de 1973, en la comuna de Granja, con declaración, que la pena se reduce a tres años, de presidio menor en su grado medio, además de la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Reuniendo en la especie el acusado Yáñez Illanes los requisitos establecidos en el artículo 4º de la ley 18.216, se remite la pena corporal impuesta, quién deberá quedar sujeto a la vigilancia y observación de la Sección de Tratamiento en el Medio Libre de Gendarmería de Chile, por el término de tres años, debiendo cumplir las demás exigencias que ese organismo importe.

Para el caso que Yáñez Oliva deba ingresar a cumplir la pena corporal que se le ha impuesto, le servirán de abono el tiempo de privación de libertad que ya se ha hecho mención en la sentencia de primer grado.

V.- Que **se confirma y aprueba** en lo demás la sentencia en alzada.

Se previene que el Ministro señor Brito estuvo por confirmar la sentencia apelada en lo referente a la determinación de la pena impuesta a



Yáñez Illanes y consecuentemente, atendido su entidad, no conceder penas sustitutivas de la Ley N° 18.216.

Se previene que el señor Llanos fue de la opinión de imponer la pena de cinco años al acusado Yáñez Illanes.

Acordada con el voto en contra de la ministra Sra. Gajardo, quién estuvo por revocar el fallo en alzada sólo en cuanto a la pena impuesta, y en su lugar aplicar lo dispuesto en el artículo 103 del Código Penal, en favor de todos los acusados, en virtud de las consideraciones expuestas en su disidencia al fallo de casación que antecede.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm y de las prevenciones y de la disidencia, sus autores.

Regístrese y devuélvase con sus tomos y custodia.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm y de las prevenciones, sus autores.

N° 24.292-2020.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 24/01/2023 12:38:59

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 24/01/2023 12:38:59

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 24/01/2023 12:39:00

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 24/01/2023 12:39:00



MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 24/01/2023 10:02:51



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., Maria Gajardo H. Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 24/01/2023 13:21:10

En Santiago, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 24/01/2023 13:21:10

